



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**

**Ejecutante:** ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS  
PROTECCION S.A.  
**Ejecutado:** DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
**Radicado:** 05001 31 05 014 2023 00234 02  
**Decisión:** A-259

### **DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA APELACIÓN AUTO**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante**, en contra del auto proferido por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el día 21 de junio de 2023, mediante el cual negó el mandamiento de pago.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

### **A N T E C E D E N T E S:**

En el proceso de la referencia, mediante auto del 21 de junio de 2023, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín resolvió NEGAR el

mandamiento de pago en favor de PROTECCIÓN S.A. y en contra del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, argumentando que:

*"... al revisar el título ejecutivo presentado por Protección S.A., se menciona como total de adeudado \$1.018.130.808, distribuido en \$232.516.007 por capital adeudado y \$785.614.801 por intereses de mora y al revisar la demanda ejecutiva, el apoderado judicial de la AFP ejecutante, distribuye la suma de \$1.018.130.808 en aportes de cotización, intereses sobre los aportes, cotizaciones al fondo de solidaridad e intereses sobre las cotizaciones al fondo de solidaridad, no existiendo coherencia entre los montos solicitados y discriminados en el requerimiento, la cuenta de cobro y la demanda ejecutiva",*

Por tal razón a juicio del despacho la documentación allegada no presta mérito ejecutivo como quiera no se constituye en una obligación exigible en términos del artículo 100 del C.P.L., en concordancia con el artículo 422 del C.G.P.

Frente a tal decisión, la EJECUTANTE interpuso recurso de apelación indicando, en síntesis, que al realizarse un estudio detallado del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en aplicación del decreto 2633 de 1994, de los mecanismos y los requisitos que establece la norma para la acción de cobro coactivo contra los empleadores morosos, solo se requiere enviar un requerimiento justamente al empleador moroso, otorgándole el término de 15 días para que se pronuncie, y finalmente, emitir la liquidación en la cual se determine el valor adeudado, lo cual se cumplió en este caso. Que, al ser un título complejo, se deben analizar los documentos que reposan y decretar el mandamiento de pago con base en los siguientes valores: i) **\$221.108.085** por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar a los trabajadores y saldos en cotizaciones canceladas de manera incompleta, por los períodos comprendidos entre junio de 1995 y agosto de 2022; ii) **\$740.655.201**, por concepto de intereses moratorios causados por cada uno de los períodos adeudados a los trabajadores mencionados y relacionados en el título ejecutivo; iii)

**\$11'407.922** por concepto de cotizaciones obligatorias al Fondo de Solidaridad Pensional en los periodos en mora discriminados en el titulo ejecutivo complejo; y iv) **\$44.959.600** por concepto de intereses moratorios causados en los periodos en mora al Fondo de Solidaridad Pensional discriminados en el titulo ejecutivo complejo, lo cual totaliza, como liquidación final, la suma de **\$1.018'130.808**.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En el término concedido para alegar de conclusión, PROTECCIÓN S.A. se reitera en cuanto a los valores por los cuales se debe librar mandamiento de pago, conformados por un título ejecutivo complejo.

### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

Pretende PROTECCIÓN S.A. se libre mandamiento de pago a su favor y en contra del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO por la suma de **\$1.018'130.808** por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar y saldos de cotizaciones canceladas de maneta incompleta, con los intereses respectivos, así como las cotizaciones obligatorias al Fondo de Solidaridad Pensional y sus propios intereses.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín se abstuvo de librar mandamiento de pago, al señalar en el auto que negó el mandamiento ejecutivo y en el recurso de reposición, que el título que se pretende reclamar no presta mérito ejecutivo al considerar que, si bien no existe discusión en la suma reclamada a la parte ejecutada, la cual asciende a \$1.018'130.808, la cuenta de cobro presentada al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO no discrimina que de esa suma una parte iba destinada al Fondo de Solidaridad Pensional, y por tal razón consideró que dicho título no es exigible.

Conforme a lo anterior, es importante tener claro que es de la esencia de cualquier proceso ejecutivo la existencia de un título que reúna los requisitos previstos en el artículo 422 del Código General del Proceso, por lo cual, pueden ser solicitadas las obligaciones contenidas en uno o varios documentos que ofrezcan verdadera certeza frente al derecho.

Esto es, el proceso ejecutivo presupone la certidumbre acerca del derecho reclamado, el cual debe estar contenido en un título que preste mérito ejecutivo y que ha de cumplir con unas condiciones esenciales, a saber: **a)** Que haga prueba por sí mismo, sin necesidad de complementarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación; **b)** Que mediante el mismo se pruebe la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida, lícita y exigible en el momento en que se inicia el juicio; y **c)** Que ofrezca plena certeza frente a la titularidad del crédito – *acreedor*- y ante quien puede ser exigido –*deudor*-.

Así pues, los requisitos de una obligación expresa, clara y exigible, merecen entenderse en su cabal significado, por lo que se pasarán a explicarse más detalladamente:

**Obligación expresa.** Esto significa declarar precisamente lo que se quiere dar a entender. El documento entonces debe contener una obligación expresa, es decir, debe consignarse en él, el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado.

**Obligación clara.** La claridad hace relación especialmente a su inteligibilidad, es decir, que no sea equivoca ni confusa y que únicamente pueda entenderse en un solo sentido.

**Obligación exigible.** La exigibilidad significa que la obligación pueda pedirse, cobrarse o demandarse. La obligación es exigible cuando válidamente puede pedirse o demandarse su cumplimiento al deudor. El plazo y la condición constituyen dos hechos que impiden la

exigibilidad. El *plazo* es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. La *condición* es un acontecimiento futuro que puede suceder o no y suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se produzca el advenimiento del hecho.

En el caso objeto de análisis, el título que se pretende ejecutar se encuentra visible de folio 70 del documento digital “03. 2023-00234 Demanda”, en el que se lee:

*“La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. con Nit. No. 800.138.188-1 procede a LIQUIDAR las Cotizaciones Obligatorias adeudadas al Sistema General de Pensiones para los Fondos de Pensión Obligatoria que Administra, por el aportante...”.*

Se señala igualmente que el total adeudado asciende a \$1.018'130.808, dividido en capital e intereses de mora por valor de \$232.516.007 y \$785.614.801, respectivamente. Como soporte de tal cobro, se anexó al expediente de folios 71 a 100 el “DETALLE DE DEUDAS POR NO PAGO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA”, y de folios 101 a 126 el “ESTADO DEUDAS REALES DETALLADAS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS” del período comprendido entre 1994-04 hasta el 2022-08, además del requerimiento hecho al deudor fechado 19 de octubre de 2022, según documento de folios 9 y 10.

El motivo que divide a la entidad ejecutante con la decisión tomada por el juez de primer grado, dice relación a que en criterio de éste último, el título ejecutivo no es exigible toda vez que en la cuenta de cobro no se discriminó que parte de ella iba destinada al cobro de aportes del Fondo de Solidaridad Pensional.

Conforme a ello, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 100 de 1993, el cual establece frente a las acciones de cobro en casos como el presente, lo siguiente: “Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de

*cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo"*

Por su parte, el decreto 2633 de 1994 "por el cual se reglamenta los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993" establece en su artículo 2º:

***"Del procedimiento para constituir en mora al empleador.*** Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993"

De las normas citadas, se observa que la AFP que pretenda adelantar un cobro ejecutivo de esta naturaleza, debe aportar prueba del requerimiento hecho a la persona frente a quien pide se libre el mandamiento de pago, y la liquidación que corresponde a las cotizaciones en mora, tal y como ocurrió en el presente caso.

Así que, el requerimiento al empleador, regulado en el Decreto 2633 de 1994, exige como único requisito que la AFP dirija una comunicación al empleador moroso, acreditándose que dicha comunicación efectivamente haya sido puesta en su conocimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala encuentra que PROTECCIÓN S.A. cumplió con los presupuestos normativos, dado que requirió al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, informándole sobre la deuda por concepto de "...no pago de aportes, pago extemporáneo y/o menor valor pagado, de sus trabajadores afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección con corte al periodo de cotización **ago-22** por los afiliados y periodos relacionados en los estados de deuda anexos al presente requerimiento."

De igual forma, anexó la liquidación de folio 100 el valor de deuda presunta, en donde el capital de la cotización obligatoria era de \$212'299.774 y sus intereses de \$704'955.800, y el capital del fondo de solidaridad de \$11'407.922 y sus intereses de \$44'959.600; y de folio 126, el valor de deuda real debida, en donde el capital de la cotización obligatoria era de \$8'808.311 y sus intereses de \$35'699.401; arrojando un valor total de \$1.018'130.808.

Además de lo anterior, PROTECCIÓN S.A. le explicó los pasos que debía seguir, y advirtió que disponía de un término de 15 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación para pronunciarse, so pena de adelantar la acción judicial de cobro.

Igualmente se acredita que la anterior comunicación fue remitida físicamente el 19 de octubre de 2022 a través de la empresa CADENA COURRIERE al Representante Legal del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, a la dirección Calle 40 entre la carrera 45 y 46, siendo recibido por esta entidad a las 2 p.m. por el señor EDER MEZA.

Ante el silencio del ejecutado, el 24 de noviembre de 2022, PROTECCIÓN S.A. realizó la liquidación de los estados de deuda, discriminando cada afiliado, así como el período y valor de las cotizaciones e intereses de mora que debe el ejecutado.

Así las cosas, examinado el título base de ejecución advierte la Sala que es claro, expreso y exigible respecto de los aportes adeudados por el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO hoy ejecutado en relación a sus trabajadores reseñados en la liquidación, existiendo certeza de la mora por el rubro de la cotización obligatoria y otro por pago al fondo de solidaridad pensional, los cuales llevan consigo los intereses liquidados al 17 de noviembre de 2022, que sin duda alguna son accesorios a la deuda y se pueden determinarse al momento de liquidar el crédito, dado que se siguen causando con posterioridad al requerimiento.

Por lo tanto, encuentra la Sala que no existe duda sobre la claridad y detalle del título ejecutivo complejo el cual cumple con las características para considerarse como tal, dado que refleja claramente una deuda con el fondo de pensiones, por lo que se **REVOCARÁ** el auto que negó la orden de librar mandamiento ejecutivo, pues dada la idoneidad de liquidación de aportes como título ejecutivo, resulta pertinente ordenarle al juez de instancia que libere el mandamiento de pago frente a las obligaciones expresas, claras y exigibles contenidas en la liquidación de aportes pensionales adeudados, obviamente sin perjuicio de la oposición y el derecho de defensa que pueda realizar la ejecutada una vez le sea notificado el mandamiento de pago.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **D E C I S I Ó N:**

**REVOCA** el auto proferido por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 21 de junio de 2023, y en su lugar se **ORDENA** librar mandamiento de pago frente a las obligaciones expresas, claras y exigibles contenidas en la liquidación de los aportes pensionales adeudados, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Sin costas en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**.



**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N°164  
del 28 de septiembre de 2023.

**Consultable aquí:**  
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 90c8796e814349e9ebd7ccd3258fea4d9cf2f2d02618c09cda2b87ab4d43d0d6  
Documento generado en 27/09/2023 03:06:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>